



Por Nicolás Lynch



# Manos Limpias

**S**e debate con intensidad en los últimos días la necesidad de que el gobierno de transición tome acciones inmediatas y concretas para afrontar el problema de gravísima corrupción destapado con la caída del fujimorismo. La oportunidad es única para hacerlo por el gran respaldo ciudadano para que se sepa la verdad de lo sucedido en esta década infame, se castigue a los culpables y se avance en la reconciliación nacional sobre la base de la justicia. De esta manera también se desterraría en forma definitiva la tentación de impunidad que todavía ronda en algunos círculos. Al respecto vale la pena entonces establecer ejes para que este combate indispensable no se vuelva una empresa inútil.

Una cuestión previa a la campaña misma es señalar que no estamos frente a casos aislados de corrupción, ni frente a una corrupción exclusiva de la cúpula fujimontesinista. Ver las cosas así sería obviar el problema de fondo. En realidad estamos frente a una organización criminal, todavía no desmontada, que se apoderó del aparato del Estado para llevar adelante sus objetivos delictivos. Se trata, por lo tanto, de una maquinaria de crimen organizado, que debe ser combatida con las herramientas que se requieren en este tipo de casos.

El tema, además, no se restringe a la corrupción asociada con el dinero, sino que tiene proyecciones muy importantes en otros dos asuntos: el legado de la guerra interna y los privilegios que han conseguido los grandes grupos económicos a la sombra de la dictadura.

Empecemos por lo inmediato, la corrupción última de la que todos hemos sido testigos. Hay necesidad de que se aceleren las investigaciones que se vienen llevando adelante para capturar a los principales implicados, en particular a Vladimiro Montesinos; de lo contrario la indignación, ya de por sí enorme, puede desbordarse y causarle muy serios problemas al gobierno del Dr. Paniagua. Pero todo no puede quedar en enjuiciamientos y capturas; hay necesidad de que se propongan y establezcan mecanismos, en especial mecanismos de control ciudadano, para que semejantes porquerías no vuelvan a suceder.

En cuanto al legado de la guerra interna hay todavía graves problemas que resolver. Se ha hablado en los últimos años de las personas injustamente detenidas y éste es ciertamente un problema pendiente, pero también están los abusos cometidos en el curso de la misma que no han sido suficientemente aclarados, así como los mi-

les de desaparecidos, cuya cifra algunos estiman en cuatro mil y otros en siete mil personas. Por último, el control que las Fuerzas Armadas mantienen, directa e indirectamente, de zonas importantes del territorio, sin que la situación actual lo justifique.

También está el tema de los privilegios que grandes grupos económicos han conseguido a la sombra de la dictadura, privilegios que como muchos señalaríamos en su oportunidad no hubiera concedido jamás un gobierno democrático de cualquier signo político. Resaltan las ventajas concedidas a banqueros y mineros, la renegociación de la deuda externa y la oscuridad de las privatizaciones, así como el escandaloso tema de las AFPs destapado en las últimas semanas. Estos privilegios, si bien han sido una cuestión recurrente en nuestra historia republicana, alcanzaron magnitudes nunca vistas durante el fujimorato y podemos señalar que constituyen una práctica corrupta porque se lograron aprovechando posiciones de poder conseguidas al amparo de la fuerza.

**Hay que  
desterrar en  
forma  
definitiva la  
tentación de  
impunidad que  
todavía ronda  
en algunos  
círculos**

La tal "Comisión de la Verdad" u "Operación Manos Limpias" que se quiere lanzar necesariamente debe tocar todos estos puntos. Quedarse en lo primero y no ver lo demás sería una forma de consagrar la impunidad y desatar la ira popular. Además, si lo que se pretende es sentar las bases éticas de una refundación democrática, esto no podrá realizarse haciéndose la vista gorda o "seleccionando" a algunos para que paguen por todos. Hay que proceder entonces a desmontar la maquinaria del crimen organizado para que volvamos a tener Estado y podamos construir un régimen de convivencia civilizada entre los peruanos.